

El derecho a tener una familia

**Paul
Martin**

Representante
de Unicef
en el Perú

La primera palabra que todo niño verbaliza es papá o mamá. Y sin duda, este hecho trae una inmensa emoción porque no se trata solamente de sílabas fáciles de pronunciar.

La madre o el padre son las personas que representan el punto de partida y de relacionamiento del niño o niña con el mundo. Cuando un bebé dice mamá simbólicamente reconoce la existencia del otro. Y ese otro es alguien muy cercano, capaz de darle cariño, cuidado, protección. Ese alguien es la familia.

El derecho a vivir en familia fue aprobado y ratificado por el Perú en su calidad de firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nadie debe ser separado de su núcleo familiar debido a las carencias materiales que esta sufra. La autoestima, la seguridad, la autonomía, la identidad y la construcción de habilidades sociales son clave para el desarrollo integral de los niños y niñas, y todos tienen derecho a crecer en un ambiente que proteja sus lazos afectivos y familiares.

De acuerdo con el artículo 8 del Código de los Niños y Adolescentes, aquellos que carecen de una familia natural tienen derecho a un ambiente familiar adecuado. Solo "pueden ser separados de su familia por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos."

Hasta febrero de 2009, un informe elaborado por el Inabif (Mimdes) evidenciaba que en el Perú existían más de 16 mil niños, niñas y adolescentes albergados en centros de atención residencial (CAR), públicos y privados.

Esta cifra, que no incluye a todos los CAR privados, demuestra que la inexistencia de un núcleo familiar, la presencia de situaciones de conflicto permanente o la desestructuración familiar son factores que llevan a que los niños sean institucionalizados.

Un informe de la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado sobre el tema, y señala que uno de cada cuatro niños albergados tienen familiares cercanos que no cumplieron con sus obligaciones, que más del 63 por ciento mantiene algún

tipo de vínculo con su familia y que tan solo un 6.3 por ciento carece de dichos vínculos.

El documento presenta un análisis de las inmensas dificultades que enfrentan estos niños institucionalizados. Un 27.4 por ciento presenta problemas de conducta, un 21.3 por ciento muestra violencia y agresividad, un 12.7 por ciento dificultades de aprendizaje, y a un 12 por ciento le cuesta establecer relaciones interpersonales.

Lo más saltante del estudio son los testimonios referidos por los propios chicos, que perciben que al vivir en albergues no pueden establecer vínculos con sus familias, y que progresivamente pierden el sentido de pertenencia con su núcleo familiar.

En la revisión de sus tres anteriores informes, el Comité de los Derechos del Niño le ha manifestado al Estado peruano su preocupación por la colocación de los niños, niñas y adolescentes en los CAR.

Señala el comité su inquietud respecto a que los albergues no estén siendo utilizados como medida de último recurso. A ello se suma la precariedad en la que se encuentran algunos centros de atención residencial, la insuficiente capacidad del Estado para atender a aquellos que requieren cuidados especiales, la necesidad de un mecanismo periódico de revisión del buen trato y el desarrollo de espacios donde los propios chicos tengan la oportunidad de disponer y acceder a mecanismos de queja. Una situación como la de los chicos que intentaron huir del Puericultorio Pérez Aranibar ilustra la desesperanza en la que viven.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado respecto de la obligación de los estados de disponer y ejecutar medidas directas de protección a la niñez, que fortalezcan la familia y garanticen el derecho que todo niño tiene a vivir con ella.

Del lado del Estado, es su deber intervenir de diversas maneras cuando existen familias que no dan a sus hijos los cuidados y seguridad necesarios. Los programas sociales, el fortalecimiento de las familias y los cuidados alternativos para evitar que el niño o niña sea separado de su círculo de pertenencia son mecanismos que intentan compensar sus privaciones.

El Perú es un país que ha avanzado en la creación de medidas de protección alternativas a la institucionalización. Los Centros de Emergencia Mujer, las Demuna, los Módulos de Atención al Maltrato Infantil en Salud y los Cedif son espacios que velan por la protección de los niños en su propio hogar.

Estas políticas públicas requieren ser reforzadas como parte de las políticas de inclusión del actual gobierno, a fin de garantizar la prevención del abandono, fortalecer el rol de la familia nuclear o extendida, y promover la tolerancia cero frente al abandono que sufren los niños.

Un centro de atención residencial debe ser la última opción de protección. Los niños y niñas en instituciones viven en un universo silencioso e invisible, sin posibilidades de reclamar su derecho a vivir en una familia que lo cuide y lo proteja, sin tener la posibilidad de verbalizar papá o mamá.

